

*Ejecutoria de la Suprema Corte
de Justicia.*

México, Mayo 28 de 1875.

Visto el recurso de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato, por Francisco Mesa, contra los procedimientos del Gefe Político de Piedragorda, que con infracción de los artículos 1º, 16 y 20 fracción 3ª, 4ª y 5ª y 126 de la Constitución federal, lo ha juzgado y sentenciado á sufrir la pena de muerte como salteador, violando además el art. 22 del mismo Código, por haberlo engrillado durante su prision. Visto el informe de la autoridad, el parecer fiscal, el fallo del inferior con cuanto mas se tuvo presente y ver convino: Por sus mismos y legales fundamentos se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Guanajuato en 30 de Diciembre del año pasado, que declaró: que la Justicia de la Unión ampara y protege á Francisco Mesa, contra el proceso que le instruyó el Gefe Político de Piedragorda, juzgándolo y condenándolo á muerte como salteador.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*E. Montes.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez*

Es copia que certifico. México, Junio 30 de 1875.—*Enrique Landa.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Jalisco, por Felipe Chavarin y otros, contra el Director Político de Ahualulco, que los condenó á la pena de muerte por los delitos de asalto y homicidio.

Pedimento del C. Promotor fiscal.

C. Juez.

El Promotor fiscal dice:

El 2 de Marzo último fueron asesinados en la villa de Ahualulco de Mercado, el extranjero Jhon L. Stephens y el C. mexicano Jesus Islas. Por tal motivo y conforme á la ley especial de 3 de Mayo de 1873, el Director Político de aquella villa procesó y condenó á muerte, entre otros, á José Mª Hernandez, Cornelio Casas, Merced Arias, Quirino Rubio y Felipe Chavarin.

Remitido el proceso al C. Gobernador para que, segun el art. 5º de la ley citada, resolviera sobre el indulto de los reos, este funcionario, cumpliendo con lo prevenido por la frac. 14 art. 28 de la Contitucion del Estado y frac. 80, art. 16 de la ley de 25 de Abril de 1868 (Decreto núm. 73), pasó el expediente al Consejo y dicho cuerpo opinó, por mayoría, que debió concederse la gracia á José Mª Hernandez y Cornelio Casas; por unanimidad, que debió negarse á Felipe Chavarin, y en cuanto á Merced Arias y Quirino Rubio, se empató la votacion.

El C. Gobernador resolvió en seguida negando el indulto á los cinco reos mencionados, obrando al hacerlo así, conforme al decreto citado núm. 73 respecto á Felipe Chavarin, y en contra del mismo decreto con relacion á los otros cuatro no indultados; pero de conformidad con la consulta del Congreso del Estado de ocho de Abril último, dado con motivo del empate sobre indulto á uno de los asesinos de

Bartholly, por la que se declaró anticonstitucional la frac. 30 art. 16 del repetido decreto y se deja al Gobernador en entera libertad para seguir o no el dictamen del Consejo.

Existiendo los antecedentes referidos, según puede inferirse del ocurso sobre amparo presentado, y estando para ejecutarse por el director Político de Ahualulco, la pena capital en los reos de que se ha hecho mérito, solicitaron por el telégrafo se suspendiera la ejecución del acto; les fué concedida por ese juzgado, y en seguida se ha presentado el defensor de aquellos, C. Eulogio Benites, entablado el amparo correspondiente.

Alega que la denegación de indulto en favor de sus defensos por el Gobernador del Estado, con apoyo de lo resuelto por el Congreso en 8 de Abril próximo pasado y en contra del decreto número 73, es contraria al art. 14 de la Constitución federal:

1º Porque la frac. 30 art. 16 del decreto núm. 73 mencionado, debe considerarse vigente mientras por una ley no se derogue ó nulifique:

2º Porque la aplicación de la consulta del Congreso, de 8 de Abril último, es retroactiva por no ser favorable á los reos;

Y 3º porque con dicha consulta se erigió un tribunal distinto del que existió al cometerse el delito.

Alega también el defensor, que en el proceso se infringió el art. 20 de la Constitución federal, por haber aleccionado la autoridad á los testigos que declararon; y por la presión que se ejerció sobre ellos, como prometió probarlo.

El Director Político de Ahualulco informa que, en sus procedimientos se sujetó con toda exactitud á la ley de 3 de Mayo del año próximo pasado; que no puede remitir copia de la sentencia, ni dar mas datos, por haber mandado la causa al C. Gobernador del Estado para los efectos del art. 5º de la ley antes citada; y que es falso haya

aleccionado á los testigos que depusieron, ni ejercido sobre ellos presión alguna.

Con honda pena tiene hoy el suscrito que emitir al juzgado su parecer, porque es contrario á los interesados, que en el presente amparo defienden su existencia; pero cumplo con el triste deber que le impone el ministerio, y pasa á manifestar los fundamentos en que se apoya:

1º Las leyes reglamentarias de una Constitución, no deben, ni pueden reformarla.

2º Para que la Constitución del Estado de Jalisco sea reformada, se necesitan los requisitos que ella misma establece en su art. 46.

3º La ley ó decreto del Estado núm. 73 es reglamentario de la Constitución, y en la parte que no lo sea, no fué expedido con los requisitos que establece el art. 46 de la misma Constitución, para que la reforme.

4º Es evidente que la frac. 30, art. 16 de dicho decreto, que dice (habla de las atribuciones del Gobernador): "Comutar penas á los criminales, previo informe del Tribunal que pronunció sentencia ejecutoria y con entera sujeción al dictamen del Consejo á quien deberá oír en estos casos," — es derogatoria de la frac. 14, art. 28 de la Constitución del Estado, que dice (habla también de las atribuciones del Gobernador): "Comutar penas con los requisitos ó formas que designe la ley," — porque la fracción de aquel decreto no establece únicamente requisitos ó formas, sino que en realidad concede al Consejo, — que solo es cuerpo consultivo, según el art. 31 de la Constitución, — lo que esta dá al Gobernador exclusivamente.

5º Ciertamente que los Gobernadores del Estado se habían constantemente sujetado al repetido decreto núm. 73, para la conmutación de penas, y que sin el crápate del Consejo por el indulto á uno de los asesinos del Sr. Bartholly, es probable que todavía hoy se sujetaría á él, el ciudadano que actualmente desempeña esas funciones; pero tal precedente no es bastante para derogar

la Constitucion, ni puede impedir que el Ejecutivo del Estado ejerza las facultades que aquella le concede.

6º Por lo mismo, la consulta del Congreso, de Abril último, no fué un acuerdo económico derogatorio de la fraccion citada del decreto núm. 73, porque esa fraccion no ha estado en vigor legalmente, sino por voluntad de los Gobernantes que quisieron sujetarse á ella, y si con motivo de la consulta de Abril último, el C. Gobernador ha comenzado á ejercer sus facultades constitucionales sobre conmutacion de penas, negando el indulto á los reos por quienes se solicita el presente amparo, no se puede decir que se aplica una ley retroactivamente, ni que se establece un tribunal diferente del que habia al cometerse el delito.

7º La aplicacion de lo dicho hasta aquí, no es necesaria para denegar el amparo al reo Felipe Chavarin, porque respecto de éste no concurren las circunstancias que respecto de los otros cuatro no indultados.

El Consejo opinó unánimemente porque se le denegara el indulto; así es que al declararse en ese sentido el C. Gobernador, no tuvo que infringir el decreto núm. 73, ni que valerse de lo consultado por el Congreso en Abril último.

8º Por lo que toca á la alegacion del defensor de haberse infringido en perjuicio de sus defensos el art. 20 de la Constitucion federal, como no hace consistir dicha infraccion en haberse violado alguna de las garantías que en sus cinco fracciones otorga ese artículo á los encausados, sino en que los testigos examinados de oficio fueron aleccionados y oprimidos para declarar, y como aun esa circunstancia es enteramente falsa, segun el informe de la autoridad política de Ahualulco, no puede servir de base para que se otorgue el amparo que solicita.

El Promotor concluye por lo expuesto, con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitucion federal y de la ley de 20 de Enero de 1869, pidiendo al juzgado: que

la Justicia de la Union no ampare ni proteja á Felipe Chavarin, Merced Arias, Quirino Rubio, José Mº Hernandez y Cornelio Casas, contra la ejecucion de la pena capital que se les ha impuesto.

Guadalajara, Mayo 14 de 1874.—A. Camarena.

Es copia. Guadalajara, Mayo 14 de 1874.—A. Camarena.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Guadalajara, Marzo 23 de 1875.

Vistos:—En 24 de Abril de 1874, el C. Juan Solano, á nombre de los reos José Mº Hernandez, Merced Arias, Cornelio Casas, Quirino Rubio y Felipe Chavarin, á quienes condenó á muerte el Director Político de Ahualulco, por los delitos de asalto y asesinato, cometidos los dias de Marzo del año anterior contra las personas del C. americano Mr. Johan L. Setephens y Jesus Islas C. mexicano, entabló juicio de amparo por violacion de los arts. 14 y 20 de la Constitucion general, pidiendo á la vez la suspension inmediata de la sentencia. El C. Juez propietario Lic. Diego I. Trejo, decretó luego la suspension del acto, y el dia 25, el C. Eulogio Benitez, como defensor de los expresados reos, presentó un escrito, fundando el recurso entablado, en las causas siguientes:

1º Que el art. 14 de la Constitucion general de la República ha sido violada, porque el Gobierno del Estado, siguiendo un acuerdo del Congreso, resolvió por sí mismo el recurso de indulto que interpusieron los reos sin sujetarse en este caso el dictámen de su Consejo, como lo previene la frac. 30 art. 16 del decreto núm. 73; porque á ese acuerdo del Congreso del Estado, se le dá un efecto retroactivo, aplicándosele á hechos que tuvieron lugar antes de él; y ademas, que el decreto 73 en la parte que dispone que en los recursos de indulto el Gobierno se sujete enteramente al dictá-

men del Consejo, no ha podido ser derogado por un acuerdo económico del Congreso, sino que debe considerarse vigente.

2º Que el art. 20 se ha violado, porque la autoridad política que formó el proceso, como el Jefe Político del respectivo Canton, ejercieron tal presión en los testigos, que quitaron á estos la libertad de declarar, y á los reos la de su defensa.

Ademas, posteriormente en otro escrito han alegado, que tambien se violó dicho art. 14, porque la ley general de 8 de Mayo de 1873, con arreglo á la cual fueron juzgados, no es esactamente aplicable al caso material del juicio.

Pedido informe á la autoridad Política de Ahualulco, lo evacuó manifestando, que formó en público la causa, que los testigos que en ella declararon son los vecinos mas caracterizados de la poblacion, y que depusieron espontaneamente sin haber intervenido ninguna presión y alhago.

El C. Promotor fiscal estendió su pedimento en contra del recurso de amparo manifestando, que aunque el Gobierno al resolver sobre el indulto, siguió el acuerdo de la Cámara contra lo que prescribe la frac. 30 del art. 16 del decreto 73; ese acuerdo es conforme enteramente con lo que dispone la Constitucion del Estado en sus arts. 28 y 31, que hacen del Consejo un cuerpo consultivo y dan al Gobierno la facultad de resolver esta clase de negocios por sí mismo; y que en fin, no juzga se haya infringido en perjuicio de los peticionarios el art. 20 de la Constitucion general, porque su puesto el informe de la autoridad política, no hubo la presión de que se trata.

Abierto el término de pruebas, presentaron los interesados los testigos para justificar la presión alegada y para demostrar que el hecho de que resultaron las muertes de Stephens ó Islas, no puede considerarse como un asalto de gavilla en poblado, con el objeto de robar, herir ó matar, sino mas bien como un tumulto sin premeditacion, ocasionado por la embriaguez de multitud

de personas, por falta de precaucion y actividad de la autoridad para impedirlo, no menos que por imprudencia de algunos, inclusive los mismos ofendidos. La necesidad de examinar algunos testigos en México y Ahualulco, hizo que el término probatorio fuese prorogado hasta el 1º de Julio último.

Hecho el alegato que proviene la ley, fué recusado el Juez propietario, y despues de haberse remitido á la Suprema Corte en diferentes tiempos, dos incidentes sobre distintas excusas que aparecen en los autos, y cuyos trámites y resoluciones han prolongado la terminacion de este juicio, el que auscribe ha continuado conociendo de él como Juez 1º suplente desde el 19 de Enero del corriente año, no habiendo procedido á fallarlo inmediatamente, por haber juzgado necesario para su perfeccionamiento, encargar á la autoridad judicial de Ahualulco la práctica de algunas diligencias que, mediante varios requerimientos, ha remitido hasta el 18 del presente mes.

Y considerando:

1º Que la resolucion denegatoria de indulto, fué dada por la autoridad competente, con sugesion á las atribuciones que le otorga la Constitucion del Estado, vigente desde 6 de Diciembre de 1857, y que esta debe ser en el mismo, la Suprema Ley, así como lo es para toda la República la Constitucion general; que en tal virtud, no ha podido prevalecer contra una prescripcion constitucional, el decreto núm. 73 de 25 de Abril de 1868, en el art. y frac. citados que la contraría.

2º Que si la Legislatura del Estado en 8 de Abril del año anterior, acordó decir al Gobierno, que en los negocios de indulto obrara conforme á la Constitucion, sin sujetarse al dictámen del Consejo, ese acuerdo no puede decirse legalmente que tenga efecto retroactivo, puesto que para que éste exista, es indispensable la concurrencia de dos circunstancias: 1ª Que la ley vuelva sobre lo pasado y lo mude; 2ª Que vuelva

y lo mude en perjuicio de las personas que son objeto de sus disposiciones. Advirtiéndose que, por pasado, se entiende en derecho todo acto ó negocio que ya no está pendiente, que por haberse concluido del todo ha sido causa de que adquirieran irrevocables derechos. (Véase á Escriche en su Diccionario de legislación en la palabra "Efecto retróactivo" párrafo 3º) Y los reos al solicitar indulto, no tienen un derecho adquirido que hacer valer, sino la esperanza de que se les otorgara una gracia, ni tampoco podían legalmente pretender que el Gobierno obedeciera de preferencia una ley reglamentaria como es el decreto 73, y no la Constitución particular del Estado: porque precisamente para esa clase de conflictos, se considerará esto cóligo como una ley suprema. Resulta de aquí, que el acuerdo de la Legislatura, no ha referídose á negocios pasados sino á uno pendiente; ni ha atacado derechos adquiridos, porque ningunos preexistían.

3º Que la presión ejercida por las autoridades, no está probada, porque de los 14 testigos que se presentaron de parte de los reos para justificarla, unos, contestando directamente sobre este punto, declararon que nada sabían; otros fundaron sus acertos en presunciones vagas; uno informó en general, sin precisar los hechos, ni agregar la razón de su dicho, y otros en fin, Cruz Rodríguez, es enteramente inverosímil en su declaración; porque después de decir que en la casa de la autoridad y en el Juzgado se hizo presión á todos los testigos, como si todo lo hubiera presenciado, agrega que esto le consta porque *se encontraba á la vez vendiendo, cierto efecto en el mercado.*

4º Que acerca de la última violación alegada, esto es, que con menosprecio del art. 14 de la Constitución general, los reos fueron juzgados y sentenciados conforme á una ley, (la de 3 de Mayo de 1873,) que no es exactamente aplicable al hecho porque se les procesó; tampoco se ha rendido la prueba correspondiente, porque á mas de que los testigos tienen los defectos de que se ha

hecho mérito en el considerando anterior, bien pudo suceder que la gavilla de malhechores asaltantes, para cubrir mejor sus proyectos, hubiesen preparado un paseo como los que ordinariamente acostumbraban hacerse en Ahualulco, se declara, ó que hayan convenido reservadamente en mezclarse en uno de dichos paseos, y en medio de la embriaguez general y descuido de la autoridad, ejecutar mejor su plan de asalto, á fin de dar en último caso, á sus hechos, el diferente carácter con que hoy se les quiere presentar.

5º Que no solo la autoridad política que falló el proceso, sino tambien el Gobierno y su consejo, que han sometido á su exámen el hecho en cuestión, han considerádolo como asalto de una gavilla en poblado, comprendido por lo mismo, en la repetida ley de 3 de Mayo. De otra suerte, si el propio Gobierno y su consejo hubiesen encontrado que un dependiente de la Administración había equivocado en la calificación del delito, confundiendo el asalto de una gavilla en poblado, con cualquiera otro diferente, no comprendido en la citada ley, no habrían ocupádose de resolver la solicitud de indulto, sino procedido como lo han hecho otras veces, mandando que se remita el proceso á la autoridad competente y absteniéndose ya de abrir dictámen ó de resolver sobre el indulto.

De conformidad con lo pedido por el C. Promotor fiscal y con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitución general y de la ley de 20 de Enero de 1869, falla con las siguientes proposiciones:

1ª La Justicia de la Union no ampara ni protege á José María Hernandez, Merced Armas, Cornelio Casas, Quirino Rubio y Felipe Chavarín, contra la ejecución de la pena capital á que los condenó el Director político de Ahualulco, por los delitos de asalto y asesinato cometidos el día 2 de Marzo del año próximo pasado, contra las personas del C. americano John L. Stephens y Jesus Islas, ciudadano mexicano.

2ª Notifíquese esta sentencia, publíquese y remítase el expediente á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

El Juez 1º Suplente, por recusacion del propietario, lo sentenció y firmó.—*B. Echauri.—G. J. Gallegos.*

Es copia. Guadalajara, Marzo 23 de 1875.—*G. J. Gallegos.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Mayo 29 de 1875.

Vistos: el amparo de garantías individuales promovido por el Ciudadano Eulogio Benites, en representacion de los reos Felipe Chavarin, Merced Arias, José María Hernandez, Quirino Rubio y Cornelio Casas, condenados á la pena capital por el Director Político del Departamento de Ahualulco de Mercado, como autores del asalto y homicidio del ciudadano de los Estados Unidos de America, John L. Stephens, y del Ciudadano mexicano Jesus Islas: la contestacion del Promotor Fiscal pidiendo, que la Justicia de la Union no ampare ni proteja á los reos: las pruebas rendidas por los quejosos: su alegato de buena prueba: la sentencia definitiva, pronunciada en 23 de Marzo del presente año, y todas las constancias del proceso.

Considerando: 1º Que la parte agravada funda su derecho, en la violacion de los artículos 14 y 20 de la Constitucion Federal, por habersele dado efecto retroactivo al acuerdo económico de la Legislatura del Estado de Jalisco, de 8 de Abril de 1874, declarando que el Gobernador del Estado tiene libertad de conformarse ó no, con la opinion del Consejo, cuando diere su dictámen, por no estar obligado á someterse á él, debiendo esta resolucion servirle de regla de conducta en todos los casos de conmutacion de pena que se presenten: y porque la autoridad política de Ahualulco, ejerció pre-

sion sobre los testigos, para que expusieran en contra de los acusados.

2º Que los Estados de la Federacion mexicana, deben gobernarse conforme á la Constitucion federal y á la particular de cada uno de ellos, segun lo determinan los artículos 126 y 41 de la primera:

3º Que la fraccion 14 del artículo 28 de la Constitucion del Estado de Jalisco, concede al Gobernador la atribucion de conmutar penas con los requisitos y en la forma que previene la ley.

4º Que ésta no ha podido privar al Poder Ejecutivo de esa facultad, sino con los requisitos prescritos por el art. 46 de la misma Constitucion de Jalisco, requisitos que no se observaron en la aprobacion de la ley número 73, de 25 de Abril de 1868.

5º Que ninguna ley secundaria puede reformar ó adicionar la Constitucion de un Estado, porque las reformas ó adiciones constitucionales solo puede hacerlas el Poder Constituyente, que no reside en una Legislatura constitucional.

6º Que en consecuencia, el acuerdo económico de 8 de Abril de 1874, no ha tenido efecto retroactivo en la denegacion del indulto pedido por los quejosos, porque no hizo otra cosa que restablecer la observancia de la ley fundamental del Estado, indebidamente restringida por una ley secundaria.

7º Que la ley de 3 de Mayo de 1873, suspendió para los salteadores y plagiaros las garantías de que habló el artículo 20 de la Constitucion federal, y por tanto, este artículo no ha sido violado por el Director Político del Departamento de Ahualulco: y

8º Que esta misma ley de 3 de Mayo de 1873, ha sido aceptada y cumplida por los Poderes del Estado de Jalisco, como lo demuestra su aplicacion, al robo y homicidio de los súbditos alemanes, D. Adolfo Bartholly y D. Guillermo Westphall. Por las consideraciones que preceden, se confirma la sentencia definitiva pronunciada en 23 de Marzo del presente año, por el Juez de

Distrito del Estado de Jalisco, que dice: "La justicia de la union no ampara ni protege á José María Hernández, Merced Arias, Cornelio Casas, Quirino Rubio y Felipe Chavarin, contra la ejecución de la pena capital á que los condenó el Director político de Ahualulco, por los delitos de asalto y asesinato cometidos el día 2 de Marzo del año próximo pasado, contra las personas del ciudadano americano John L. Stephens y Jesus Islas, ciudadano mexicano."

Devuélvanse estos autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia, librándose igual copia al Poder Ejecutivo federal por conducto del Ministerio de Relaciones: publíquese, y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo sentenciaron los ciudadanos Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*M. Auza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*E. Montes.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Junio 2 de 1875.—*Enrique Landa*, secretario.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Jalisco, por Francisco Soto, contra la sentencia de la pena de muerte á que fué condenado por el delito de homicidio.

Pedimento del C. Promotor Fiscal.

C. Juez:

El Promotor fiscal dice: "Francisco Soto, es uno de los reos condenados á la pena

capital, conforme á la ley de 3 de Mayo de 1873, por la autoridad política de Ahualulco, como culpable en los asesinatos del americano Jhon L. Stephens y del mexicano Jesus Islas. Habiendo obtenido del Juzgado se suspendiera la ejecución de la sentencia, como acto reclamado en el presente amparo, se ha remitido el expediente al suscrito para que emita su parecer sobre lo principal.

"Segun el quejoso, se atacan por el C. Gobernador del Estado las garantías que al petente otorga la Constitución: 1º porque se le ha juzgado por la ley especial de 3 de Mayo de 1873, dada por el Congreso de la Union sobre delitos que deben estar sujetos á las leyes de los Estados, con lo que se ha invadido la soberanía de estos; y 2º porque al negársele el indulto por el C. Gobernador contra el dictámen del Consejo de Estado, no ha cumplido con la sujecion al parecer de ese cuerpo, que le impone la frac. 30, art. 16 del decreto núm. 73, y ha infringido, por lo mismo, en perjuicio del solicitante, el art. 14 de la Constitución.

"Honda pena causa al suscrito emitir su parecer en el presente juicio que, como último recurso para salvar su existencia, ha entablado el quejoso, porque ese parecer es contrario al amparo que se solicita de la Justicia federal; pero cumpliendo con el triste deber que por esta vez le impone el art. 9º de la ley de 20 de Enero de 1869, pasa á manifestar los fundamentos en que se apoya.

1º Los plagiaros y salteadores evidentemente gozan y deben gozar de todas las garantías constitucionales que otorga nuestro Pacto fundamental, con excepcion de aquellas que por bien de la sociedad y en su justa defensa, estén suspendidas especialmente contra esos criminales por ley general expedida con autorizacion del mismo Pacto. La Ley de 3 de Mayo de 1873 fué expedida con el objeto y autorizacion indicadas, por el Congreso de la Union, en virtud de la facultad que le concede la frac.